

## Transparencia y triarquías oligárquicas

**Sr. D. Víctor Pérez-Díaz**

**Presidente de Analistas Socio-Políticos, Gabinete de Estudios**

La transparencia del espacio público es una condición clave para evitar la degeneración de las democracias liberales en "triarquías oligárquicas".<sup>1</sup> El término está inspirado en la lectura de los filósofos griegos de hace casi dos milenios y medio, en particular de la *República* de Platón,<sup>2</sup> y se refiere a la combinación de políticos ambiciosos, los timócratas, de ricos sin sentido cívico, los plutócratas, y de pensadores y comunicadores complacientes, los sofistas, que manejan los asuntos públicos con la vista puesta, sobre todo, en su propio y mutuo beneficio. Para el mejor funcionamiento de este sistema de apaños entre unos y otros (no exento de rivalidades), aquellas triarquías oligárquicas (de derechas, de izquierdas o de centro) tratan de mantener los ciudadanos a distancia. Para ello, les entretienen en un estado de irritabilidad que les desgasta en batallas internas, y les mantienen en un estado de confusión. De ahí que las triarquías cultiven la opacidad, es decir, la falta de transparencia de los asuntos públicos.

Esta falta de transparencia contribuye poderosamente a que la ciudadanía se quede al margen del espacio público, no se entere de los detalles de los temas políticos ni esté en condiciones de comprender su complejidad, y pierda la prudencia y la ecuanimidad necesarias para participar en una conversación razonable sobre ellos y el consiguiente proceso de decisión. Le es imposible, por tanto, familiarizarse con los problemas colectivos y adquirir los hábitos propios de una ciudadanía alerta. Al final, se ve empujada a asumir la actitud de quienes se dicen algo parecido a: "bastante tenemos con vivir para que encima tengamos que enterarnos de tantas cosas", o "bueno, ya está bien, de vez en cuando daremos nuestro voto al partido del que nos sentimos más cerca [o menos lejos], aplicando el sentido común o el sentido de la realidad que tengamos". Por desgracia, es probable que, llegados a este punto, se trate del sentido de una realidad elemental, percibida a partir de una experiencia política mínima, y bajo la influencia de unos procesos de socialización de recorrido corto, una educación mediocre, un ambiente

---

<sup>1</sup>Víctor Pérez-Díaz, *El malestar de la democracia*, Barcelona, Crítica, 2008.

<sup>2</sup>Ver en especial el libro VIII de Platón, *La República*, traducción de José Manuel Pabón y Manuel Fernández-Galiano, Madrid, Alianza, 1988.

mediático ruidoso y las propagandas auto-interesadas de los partidos.

La historia muestra que la degeneración de la democracia liberal en una dirección oligárquica es todo menos excepcional. Es una tentación en la que las sociedades caen de manera recurrente; esto vale para los gobiernos locales semipopulares de la Italia medieval, las sociedades con gobiernos representativos de la edad moderna, y las democracias de los dos últimos siglos. La degeneración es cuestión de grado, y el grado de dominación oligárquica puede ser mayor o menor. Pero, en determinadas circunstancias, el proceso de decadencia puede abocar a situaciones de grave desorden político, económico y cultural. Imaginemos, por ejemplo, la situación de un país con un problema importante de legitimidad sustantiva que pone en cuestión su capacidad para resolver problemas mayores: por ejemplo, una crisis económica con una cuarta parte de su población activa en paro y una amenaza plausible de ruptura de su unidad territorial. Esto es lo que ocurre ahora en España. Con el añadido de que, en este caso, aquellos problemas objetivos debe abordarlos una sociedad con una desconfianza generalizada e intensa respecto a su clase política. Así lo avalan los datos de encuesta que muestran que, en los últimos tiempos, los españoles confían muy poco en sus políticos, creen que éstos apenas se preocupan por lo que piensen los ciudadanos corrientes, y expresan escaso interés por la política; lo cual sugiere que estamos ante ciudadanos desconfiados y pasivos. A lo que se añade que son bastante bajos los porcentajes de quienes son miembros de asociaciones y de quienes suelen confiar en los demás; lo cual indica que estamos ante ciudadanos con poca disposición a unir sus esfuerzos para resolver problemas comunes.<sup>3</sup>

Además, esta sociedad pone de manifiesto hábitos y actitudes de apatía e indiferencia y, tal vez, de perplejidad moral, a la hora de comprometerse en la solución de problemas colectivos, reforzados por el hecho de que percibe el mundo político y administrativo como dominado por la corrupción. Los datos al respecto son claros, y tanto más elocuentes cuanto que, en la comparación con otros países europeos, España aparece en posiciones de relativa desventaja. En ella, un porcentaje de población alto cree que hay una corrupción importante tanto en sus instituciones locales (46,6%) como regionales (46,5%) o nacionales (48,1%); inferior al observado en Grecia (en torno al 70%), pero muy superior al de Holanda (en torno al 17%) o al de un país escandinavo como Dinamarca (en torno al 5%).<sup>4</sup> Esta impresión general se confirma cuando

---

<sup>3</sup>Sobre estos indicadores puede verse Víctor Pérez-Díaz y Juan Carlos Rodríguez, *Capital social e innovación en Europa y en España*, Madrid, Cotec, 2013.

<sup>4</sup>Estos porcentajes, y los que vienen a continuación, proceden del Eurobarómetro 72.2 (2009) y de Transparency International (2010).

descendemos a los detalles. Muchos españoles tienen la sensación de que los sobornos y el abuso de las posiciones de poder para la ganancia personal están extendidos en la policía (45,7%) y en el sistema judicial (46,6%), entre los políticos nacionales (70,2%), regionales (65,9%) y locales (66,9%), entre los funcionarios a cargo de la contratación pública (45,1%), de las licencias de edificación (57,6%) y de las licencias de negocios (44,4%). Se trata de porcentajes inferiores a los de Grecia pero muy superiores a los de los países nórdicos. Es obvio que en España el estado inspira un grado de confianza bajo.

Observemos, por último, que no se trata de una situación coyuntural. Al menos una parte de los indicadores anteriores han permanecido bastante estables durante las últimas dos a tres décadas. Probablemente reflejan no un momento dramático de crisis, sino un vivir en estado de crisis crónica; que no han querido reconocer los protagonistas del debate público, es decir, la clase política, las elites económicas, las elites culturales y los medios de comunicación, o lo han hecho de manera espasmódica y superficial.

¿Qué se puede hacer en estas condiciones? Por lo pronto, cabe "predicar el evangelio de la transparencia"; y al tiempo, como nos recuerda el refrán popular, "además de predicar, dar trigo". Es decir, establecer un marco de incentivos institucionales realistas y precisos (con atención a los detalles) que sancionen tanto las prácticas de opacidad de la vida pública como las de la corrupción; y promover un cambio de cultura, no de cultura proclamada (declaraciones de valores) sino de cultura vivida (hábitos de conducta).

Tres factores pueden ayudar en esta tarea de reforma: la oportunidad europea, la presión de la ciudadanía y la conversión moral de las elites, empezando por la propia clase política.

Primero, la oportunidad de nuestra inmersión (cada vez mayor) en Europa abre la puerta a la imitación de las mejores prácticas europeas. En lugar de que los españoles se imiten a sí mismos y tomen como modelo sus prácticas de cien años (o más) de una vida política y administrativa bastante afectada de clientelismo y de un partidismo cainita, cabe que tomen como modelo, pongamos, a los países nórdicos de los últimos cien años (o más). Hoy día, en este mundo que dicen de la información y la globalización, no debería ser tan difícil elegir bien los modelos. En este caso, aquellos países no están tan lejos, y las distancias culturales con ellos tampoco deberían suponer un escollo insalvable.

Segundo, dentro de España cabe encontrar diversos puntos de apoyo para una gran reforma en el sentido de un aumento de la transparencia. El punto de apoyo más obvio está en la actitud de rechazo a la corrupción por parte de la sociedad, que se ha hecho cada vez más intensa y general. La gente "ya no aguanta más". Ha llegado, o está llegando, al límite de lo

tolerable y, en lugar de encogerse de hombros y refugiarse en el victimismo, protesta de manera cada vez más frecuente y razonada. Siente que necesita informaciones y explicaciones adecuadas sobre lo que está pasando, no palmaditas en la espalda; y que necesita "las cuentas claras", y las necesita "ya".

Tercero, hay focos de sensatez y de decencia cívica dentro del *establishment*, o triarquía oligárquica, de los que se podría esperar su conversión. En parte, porque la tradición moral del trabajo bien hecho, y hecho con sentido del bien común, sigue viva en esos focos. Esto es obvio entre los funcionarios, en la medida en que entienden la función pública, o el servicio público, como un *servicio al público*. Podrían actualizar la idea antigua, pre-moderna, del ejercicio del poder como un acto continuado de servicio a la comunidad. Otro tanto cabría pensar de la clase política. Es obvio que en la motivación de muchos de sus miembros sigue latiendo la visión de la profesión política como una vocación altruista, que puede reforzarse si la ciudadanía les obliga o les incita a ello, o desviarse, si la ciudadanía no lo hace porque se refugia en una actitud complaciente, servil o de mera protesta. Pero la primera posibilidad, la de una conversión moral de una parte de los políticos y el desarrollo de su virtud cívica, no debe descartarse. Tanto más cuanto que, para muchos de ellos, el atractivo interno de la conversión y de los nobles sentimientos puede combinarse con el incentivo externo de que, si lo hacen de manera persuasiva y el público, atento, les cree, ello pueda facilitarles el acceso al poder.